



Resolución Directoral

09

agosto

2021

Lima, de..... del.....

VISTOS:

Que el Expediente N° 48050-2018-PAS, correspondiente al Administrado **INDUSTRIAS POZO E.I.R.L.**, identificado con RUC N° 20514765902, ubicado en **Pasaje Las Perlas S/N, Sector Huayrapata, Distrito y Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac**, sobre la caducidad del plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador, y el Informe N°627-2021/DFIS/DIGESA, de fecha 25 de febrero de 2021, del Área de Instrucción de la Dirección de Fiscalización y Sanción; y,

CONSIDERANDOS:

Que, con fecha 13 de febrero de 2018, personal inspector de la Gerencia Regional de Apurímac II, se apersonó a la empresa **INDUSTRIAS POZO E.I.R.L** (en adelante, **administrada**), identificada con RUC N° 20514765902, ubicado en **Pasaje Las Perlas S/N, sector Huayrapata, distrito y provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac**, con la finalidad de verificar las condiciones higiénicas sanitarias durante toda la cadena alimentaria desde la elaboración de la materia prima hasta el producto final.

Que, mediante Oficio N° 237-2018/DG-DISURS-CHANKA-AND (Expediente N° 10409-2018-DRS), de fecha 01 de marzo de 2018, la Dirección de Salud Apurímac remitió a la DIGESA, el Acta Ficha N° 9 – Acta de Inspección Sanitaria de Establecimientos Procesadores de Alimentos Vigilancia Post Registro Sanitario, del 13 de febrero de 2018, conjuntamente con el Informe N°-23-2018-HA/DSBHAZ/DESA/DISURSCH-AND de la Coordinadora de Higiene Alimentaria de la Dirección Sub Regional de Salud Chanka Andahuaylas.

Que, el día 03 de setiembre de 2018, mediante Memorándum N° 422-2018/DCOVI/DIGESA, la Dirección de Control y Vigilancia (en adelante, **DCOVI**) remitió a la Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, **DFIS**), el Expediente N° 10409-2018-DRS, conjuntamente con el Informe N° 2455-2018/DCOVI/DIGESA, sobre la vigilancia sanitaria efectuada al establecimiento de la administrada.

Que, a través del Auto N° 166-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA, de 13 de mayo de 2019, sustentado en el Informe N° 002287-2018/AI/DFIS/DIGESA, del 27 de setiembre de 2018, la Autoridad Instructora de la DFIS, decidió iniciar procedimiento administrativo sancionador (en adelante **PAS**) en contra de la administrada, por la presunta comisión de infracciones tipificadas en los literales a), e) y m) del artículo 121 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias, las cuales fueron debidamente notificadas a la referida el 21 de mayo de 2019.

Que, con fecha 28 de mayo de 2019, mediante Carta S/N (Expediente N° 48050-2018-PAS-001), la administrada presentó sus descargos contra el Auto N° 166-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA.

Que, mediante Oficio N° 1299/DG-DISURS-CHANKA-AND (Expediente N° 19-102923-001), recibido el 09 de setiembre de 2019, la DIRESA Apurímac II remitió a la DIGESA, el "Acta Ficha N° 001- Inspección Sanitaria de Establecimientos Procesadores de Galletas Enriquecidas/Fortificadas/ Pan Fortificado", del 25 de octubre de 2018, efectuada al establecimiento de producción de la administrada.

Que, según Oficio N° 086-2020/DFIS/DIGESA, de fecha 05 de febrero de 2020, la Autoridad Instructora de la DFIS solicitó a la DIRESA Apurímac, se sirva hacer efectiva la notificación de la Resolución Directoral N° 027-2020/DFIS/DIGESA/SA, sustentado en el Informe N° 086-2020/AI/DFIS/DIGESA, mediante la cual se dispuso la ampliación por tres (03) meses adicionales del plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la administrada, iniciada mediante Auto N° 166-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA.

Que, el día 04 de setiembre de 2020, mediante MENSAJERÍA de la DIGESA-MINSA, se notificó el Auto de ampliación N° 174-2020-AI-DFIS-DIGESA, al administrado INDUSTRIAS POZO E.I.R.L., en su correo electrónico indpozo@gmail.com, conforme consta en el presente expediente.

DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE SALUD

Que, el artículo 128° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señala que: «la Autoridad de Salud está facultada a practicar inspecciones en cualquier bien mueble e inmueble, tomar muestras y proceder a las pruebas correspondientes, recabar información y realizar las demás acciones que considere pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, así como de aplicar medidas de seguridad y sanciones».

Que, el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de Alimentos, establece que: «El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria es la Autoridad de Salud de nivel nacional y tiene competencia exclusiva en el aspecto técnico, normativo y de supervigilancia en materia de inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, elaborados industrialmente, de producción nacional o extranjera, con excepción de los alimentos pesqueros y acuícolas».

Que, en ese sentido, con el propósito de cumplir el objeto de las citadas normas, para quienes la infrinjan, se han regulado las infracciones administrativas mediante el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.

Que, dichas infracciones tendrán como consecuencia una sanción administrativa, que será impuesta por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, quien en el uso



Resolución Directoral

09

agosto

2021

Lima, de del.....

de sus atribuciones que le confieren la citada ley, las leyes de organización y funciones, otras leyes especiales y sus reglamentos, está facultada para disponer acciones de orientación y educación, practicar inspecciones en cualquier bien mueble o inmueble, tomar muestras y proceder a las pruebas correspondientes, recabar información y realizar las demás acciones que considere pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, así como de ser el caso, aplicar medidas de seguridad y sanciones, de conformidad con el artículo 128 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud.

Que, por otro lado, cabe precisar que mediante el Decreto Supremo N° 008-2017-SA se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA, que establece la estructura orgánica de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, la misma que cuenta entre otras unidades orgánicas, con la Dirección de Fiscalización y Sanción, que tiene como función fiscalizar, así como establecer medidas correctivas, medidas de seguridad, medidas cautelares, y sanciones de acuerdo a su competencia, conforme al artículo 83° del citado documento de gestión.

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Que, mediante Auto N°166-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA, de fecha 13 de mayo de 2020, y visto el Informe N°2287-2018/AI/DFIS/DIGESA, se decidió iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra la administrada **INDUSTRIAS POZO SE.I.R.L., identificada con RUC N° 20514765902**, con domicilio ubicado en **Pasaje Las Perlas S/N, sector Huayrapata, distrito y provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac**, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-9-SA, y sus modificatorias, dicho auto, fue debidamente notificado con fecha 21 de mayo de 2019, conforme consta en el presente Expediente N° 5650-2020-PAS.

LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Que, conforme lo señala la doctrina española, la caducidad es aquella institución jurídica que de producirse (por el mero transcurso del tiempo) inhabilita legalmente a la autoridad administrativa para proseguir con el procedimiento administrativo sancionador iniciado, sin importar la etapa en que se encuentre, o para exigir la sanción decidida, pero no notificada oportunamente.

En ese sentido, la caducidad constituye una figura jurídica que determina el tiempo máximo dentro del cual se debe instruir y resolver —que incluye notificar— un procedimiento sancionador.

Que, el artículo 259° del TUO de la LPAG, señala lo siguiente:

“Artículo 259.- Caducidad del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.
2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo.
3. La caducidad es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio.
4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado no interrumpe la prescripción.
(...)”

Que, todos aquellos procedimientos administrativos sancionadores que fueron iniciados con posterioridad a la fecha de publicación del Decreto Legislativo N° 1272, Decreto que modifica la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N.° 29060, Ley del Silencio Administrativo, cuentan con nueve (09) meses desde la fecha de notificación de la imputación de cargos para ser resueltos definitivamente. Sin embargo, este plazo puede ser ampliado excepcionalmente por tres (3) meses adicionales, para lo cual el órgano competente deberá emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento.

Que, considerando que el Auto N°166-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA, con el cual se inició el PAS contra el administrado, fue notificado el **07 febrero de 2020**, fecha en la que empieza a computarse el plazo de nueve (09) meses que tiene la administración para resolver la causa, no obstante, se ha verificado que a la fecha ha excedido el plazo máximo para emitir pronunciamiento (**21 de mayo de 2019**), por lo que corresponde declarar la caducidad del presente PAS y, consecuentemente, **corresponde archivar el PAS**.

Que, es relevante señalar que, de la revisión de los actuados, se advierte que, la Autoridad Instructora de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la DIGESA, aún cuenta con competencia para pronunciarse respecto de las posibles infracciones en las que hubiera incurrido la administrada, ya que las observaciones efectuadas, corresponde al **Acta de Inspección Sanitaria de Establecimientos Procesadores de Galletas Enriquecidas/Fortificadas/pan Fortificado, de fecha 13 de febrero de 2018**, por lo que ameritaría ser materia de evaluación por parte de la autoridad competente, en ese sentido, al no encontrarse dentro de los alcances de la prescripción regulada en el artículo 259° del TUO de la LPAG, se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 259° de dicho cuerpo normativo.

Que, finalmente, de conformidad con el numeral 5 del artículo 259° del TUO de la LPAG, señalar que la caducidad administrativa del presente PAS, no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización (contenidas en las actas de muestreo), así como los medios probatorios que no



Resolución Directoral

09

agosto

2021

Lima, de..... del.....

puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente; así también, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas, de ser el caso, se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego del cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza.

Que, de conformidad con el contexto analizado, la potestad de la autoridad sanitaria de poder iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de inacción administrativa que conllevaran a la declaración de caducidad del presente procedimiento, solo se hace posible cuando se advierta situaciones de negligencias;

Que, de la revisión del expediente no se advierte responsabilidad administrativa directa en el manejo de tiempos y plazos procesales, en mérito a la situación de emergencia sanitaria que afronta el Estado a nivel nacional, lo que ha afectado el accionar regular de las funciones de la DIGESA en general, que se traduce en la problemática propia de las notificaciones a nivel de Lima Metropolitana y a las Regiones; así falta de recurso humano de apoyo administrativo que en su mayoría se encuentran laborando vía remoto o semi-presencial, optando en su mayoría por el aislamiento social y la protección de su salud y la de sus familiares y considerando que nuestras acciones y plazos procesales se encuentran interrelacionados de manera directa e indirecta con las actuaciones de los proveedores como las notificaciones, el escaneado, el armado de expedientes y la planificación y procedimientos de fiscalización propias del proceso sancionador; determinándose que no hay intención de caducar un expediente a cargo, infiriéndose que no es posible la calificación de responsabilidad administrativa para el presente caso;

Que, con el visado de la coordinadora del Área de Sanción de la Dirección de Fiscalización y Sanción, y;

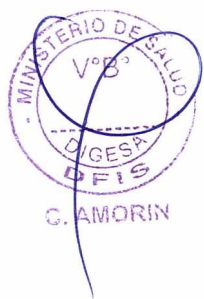
De conformidad a lo establecido en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1161; el Decreto Supremo N° 008-2017-SA – Reglamento Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA; la Ley N° 26842 – Ley General de Salud; y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la **CADUCIDAD** del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Administrada **INDUSTRIAS POZO E.I.R.L.**, **Identificado con RUC N° 20514765902**, mediante **Auto N°166-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA**, y **notificado el 21 de mayo de 2019**, por haber excedido el plazo máximo para emitir pronunciamiento conforme a lo previsto en el artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en consecuencia, corresponde disponer el **ARCHIVO** del Expediente administrativo tramitado bajo el N° **48050-2018-PAS**.

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR el presente expediente administrativo a la Autoridad Instructora de la Dirección de Fiscalización y Sanción, para que actúe de acuerdo a sus atribuciones, de conformidad con el numeral 4 del artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, pudiendo también evaluar nuevas acciones de fiscalización si lo fuera necesario.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a la administrada **INDUSTRIAS POZO E.I.R.L.**, Identificado con **RUC N° 20514765902**, en su dirección ubicado **Pasaje Las Perlas S/N, Sector Huayrapata, Distrito y Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac**, y en su correo electrónico **indpozo@gmail.com**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.



Regístrese y comuníquese

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Salud Ambiental
e Inocuidad Alimentaria
DIGESA
ROLAND ALEX IPARRAGUIRRE VARGAS
Director Ejecutivo
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN